

e-phc⁷



Guía básica para el
uso, la gestión y la
intervención en el
patrimonio cultural
de Andalucía

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Consejero de Turismo,
Cultura y Deporte
Arturo Bernal Bergua

Viceconsejero de Turismo,
Cultura y Deporte
Víctor Manuel González
García

Secretaría General para la
Cultura
Salomón Castiel Abecasis

Director del Instituto
Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH)
Juan José Primo Jurado

Edita:
Consejería de turismo, Cultura
y Deporte. Junta de Andalucía

Copyright:
Consejería de Turismo, Cultura
y Deporte. Junta de Andalucía

Coordinación de la edición:
Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico

Coordinación científica:
Blanca del Espino
Hidalgo, IAPH
José Luis Gómez Villa, IAPH

Autores:
Pilar Acosta Ibáñez, IAPH
Blanca del Espino
Hidalgo, IAPH
Marta García de Casasola
Gómez, Universidad de Sevilla
José Luis Gómez Villa, IAPH
María Teresa Pérez Cano,
Universidad de Sevilla
Virginia Rodríguez Díaz, IAPH

Colaboradores:
Autores de los contenidos
del material académico del
MOOC Patrimonio Cultural de
Andalucía, IAPH

Imágenes:
Repositorio de Activos Digitales
del IAPH (<https://repositorio.iaph.es/>). 01. Vista del castillo
de Santa Catalina desde la
playa de la Caleta (Cádiz) |
foto Isabel Dugo Cobacho; 02.
Puente de Triana, Sevilla | foto
Juan Carlos Cazalla Montijano;
03. Museo Provincial de Bellas
Artes de Granada. Vista parcial
de una sala | foto Juan Antonio
Martín Jaimez; 04. Panda
de verdiales (Málaga) | foto
Eva Cote Montes; 05. Iglesia
Catedral de la Asunción de
la Virgen de Jaén | foto Juan
Carlos Cazalla Montijano

Coordinación del programa
de publicaciones del IAPH:
Marta Sameño Puerto,
Directora de Investigación
y Transferencia

Equipo editorial IAPH:
María Cuéllar Gordillo
Cinta Delgado Soler
Carmen Guerrero Quintero

Apoyo editorial:
Candela González Sánchez

Corrección de textos:
Decultura Ediciones

Diseño:
Manolo García nz

Maquetación:
María Rodríguez Achútegui

Esta obra está bajo una
licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España.

La licencia completa está
disponible en:
[http://creativecommons.org/
licenses/bync-nd/3.0/es/](http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/3.0/es/)

Este volumen ha sido
elaborado y financiado en
el marco de los proyectos
Sistema de Innovación
para el Patrimonio de la
Andalucía Rural (SIN_PAR),
en la convocatoria 2020 de
proyectos de I+D+i de Plan
Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI),
con código PY20-00298,
y Sistema de Innovación
Turística para el Patrimonio de
la Andalucía Rural (SIT_PAR),
en la convocatoria 2020
de proyectos de interés
colaborativo en el ámbito de
los Ecosistemas de Innovación
de los Centros de Excelencia
Internacional, dentro del Centro
de Excelencia Internacional
en Patrimonio, con código
PYC20 RE 029 IAPH. Ambos
proyectos están cofinanciados
con fondos europeos FEDER en
el Programa Operativo 2014-
2020.



AÑO DE EDICIÓN: 2022
ISBN 978-84-9959-439-2

Guía básica para el uso, la gestión y la intervención en el patrimonio cultural de Andalucía

Coordinación

Blanca del Espino Hidalgo, Centro de
Documentación y Estudios, IAPH

José Luis Gómez Villa, Centro de Apoyo a la
Administración Pública en Políticas Tutelares
y del Centro de Intervención, IAPH

Presentación

El acercamiento a la sociedad de los conocimientos en patrimonio cultural, la toma de conciencia de esta sobre el valor de lo que es reconocido como legado y, a la vez, herencia, constituye, sin lugar a dudas, la principal herramienta para su salvaguarda.

En este marco, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte lleva trabajando desde hace más de tres décadas en la concienciación social acerca de la importancia del patrimonio como recurso cultural, de cohesión, económico y de desarrollo. Por tanto, esta Guía se enmarca en la cercanía y en la responsabilidad de contribuir con nuestro patrimonio al desarrollo local. Este volumen nace fruto de la iniciativa de dos proyectos cuyos contenidos se enfocan en la innovación y el turismo para el patrimonio de la Andalucía rural, gracias a la financiación mixta entre el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía y la Unión Europea, mediante el programa operativo FEDER para Andalucía.

Esta Guía básica para el uso, la gestión y la intervención en el patrimonio en Andalucía tiene la intención de transmitir, refrescar o actualizar una serie de conceptos, de claves o de conductas con las que podemos mejorar la calidad de nuestra propia relación y experiencia con el patrimonio cultural en el ámbito de Andalucía. Pretende ser, por tanto, una puerta de entrada universal y amable que permita a la ciudadanía –que no tiene por qué ser docta en la materia–, adentrarse en nuestro rico universo patrimonial.

Para ello, se han estructurado sus contenidos en cinco capítulos que pretenden dar respuestas lo más esclarecedoras posibles a recurrentes preguntas ya aceptadas en nuestra comunicación cotidiana: ¿Quién gestiona el patrimonio cultural? ¿En qué consiste su protección? ¿Cómo se interviene, restaura? ¿Dónde encontrar más información sobre el patrimonio? ¿Qué más puedo hacer, cómo me puedo involucrar?

En la voluntad de abrir estas puertas de interés e iniciación, gracias a la madurez de experiencias en la ya dilatada trayectoria del Instituto y de su red de colaboradores especializados reflejados en estos textos y sus recursos gráficos, digitales o bibliográficos, el IAPH renueva su constante compromiso con el patrimonio cultural mediante la publicación de esta Guía. Ese es su compromiso con toda la ciudadanía de Andalucía.

Juan José Primo Jurado
Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Índice

08

Introducción

16

Capítulo 1

¿Quién y cómo se gestiona el patrimonio cultural desde las Administraciones?

Introducción.

Sobre cómo se determina quién puede ayudarnos en la legislación en patrimonio.

Las Administraciones con competencias en patrimonio: el Estado.

Las Administraciones con competencias en patrimonio histórico: Andalucía.

El papel del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Las Administraciones con competencias en patrimonio: los municipios.

38

Capítulo 2

¿En qué consiste la protección de un bien patrimonial?

¿En qué consiste y por qué la protección del patrimonio?

La protección desde la legislación y herramientas de las Administraciones competentes en cultura y patrimonio histórico.

La protección desde otros ámbitos sectoriales.

¿Cómo y dónde consultar el grado de protección de un bien?

¿Qué consecuencias tiene la protección de un bien?

¿Cómo proponer la protección patrimonial de un bien?

56

Capítulo 3

¿Cómo se interviene en el patrimonio cultural?

Metodología general para intervenir en patrimonio: el proyecto patrimonial.

El proyecto de conservación: un requisito de la legislación patrimonial andaluza.

La experiencia del IAPH.

Criterios de intervención.

80

Capítulo 4

¿Dónde encontrar más información sobre patrimonio cultural?

Introducción.

Recursos de información del patrimonio cultural: ¿qué son y dónde encontrarlos?

Recursos técnico-científicos.

Recursos académicos y formativos.

Recursos administrativos.

Recursos normativos.

Recursos de difusión.

Información geográfica del patrimonio cultural: ¿qué es, para qué sirve y dónde encontrarla?

104

Capítulo 5

¿Qué más puedo hacer por el patrimonio?

Un bien común, una responsabilidad compartida.

Transmitir su valor a las generaciones futuras.

Adoptar un papel activo en la salvaguarda patrimonial.

Seguir aprendiendo sobre patrimonio.

Dedicarse profesionalmente al patrimonio cultural.

Seguir en contacto con instituciones, entidades y asociaciones que trabajan con patrimonio cultural.

125

Conclusión


130

Bibliografía



02



The background image shows a portion of a historic building. At the top, there is a balcony with an ornate wrought-iron railing. Below the balcony, a large, circular architectural element, possibly a porthole or a decorative window, is visible. The building's facade is light-colored with various windows and architectural details. The text is overlaid on the middle section of the image.

¿En qué consiste la
protección de un bien
patrimonial?



¿En qué consiste y por qué la protección del patrimonio?

Todos conservamos pequeños recuerdos familiares de nuestros padres, abuelos... que tienen para nosotros un valor sentimental, con independencia de su valor material si fuera el caso, y que guardamos con esmero, protegemos para, en la medida de lo posible, poder llegar a transmitírselos a nuestros seres queridos. Procuramos custodiarlos, preservarlos de forma adecuada, para garantizar su conservación física.

Igual que ocurre con cualquier objeto personal que apreciamos, sucede con el patrimonio. El proceso es básicamente el mismo, una vez que entendemos como sociedad que un edificio, un jardín o espacio público, en general, una ciudad o una porción de esta tienen valores culturales, casi de forma automática intentamos protegerlos, incluso tutelarlos, con el fin de conservarlos para pasarlos a la siguiente generación; por eso hablamos de protección del patrimonio.

Según la Real Academia Española, proteger significa “resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro”. Debemos, entonces, preguntarnos: ¿es que el patrimonio está en peligro? Si la respuesta es afirmativa, la siguiente pregunta sería saber cuáles son los peligros que acechan al patrimonio y que obligan a legislar para su protección.

Cuando hablamos de peligros o perjuicios, son muchos los factores para tener en cuenta, pues en función de estos tomaremos unas medidas u otras. En primer lugar, es importante considerar la naturaleza del bien y si se trata de patrimonio

material o inmaterial, tangible o intangible. No es igual si hablamos de proteger una romería o una fiesta que una actividad o un cuadro, una escultura, un edificio o una ciudad. Incluso si ya pensamos en un edificio, la situación será distinta dependiendo de su calidad o reconocimiento, no usaremos los mismos recursos si el inmueble está protegido que si no lo está, e incluso si está declarado bien de interés cultural, que si está catalogado a secas.

Otra cuestión importante es diferenciar el tipo de agresión, esta puede ser directa o indirecta, consciente o por descuido, derivada de cuestiones sobrevenidas (catástrofes naturales) o producida simplemente por el paso de los años. Los cambios culturales, la lógica capacidad de transformación de la sociedad, los cambios de vida hacen que, a veces, los edificios pierdan su uso original. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura defensiva: castillos, murallas; o la religiosa: conventos, ermitas; e incluso la propia tipología residencial: casas de vecinos, corrales, casas señoriales. En este sentido, un apartado importante para añadir sería la arquitectura ligada a los modos de producción: agrícola, ganadera o industrial. Así, encontramos haciendas, cortijos, molinos, bodegas, fábricas, etc., cuyos usos originales no son viables y, por tanto, al desaparecer el fin para el cual fueron diseñados, su perpetuación física corre peligro.

Por otro lado, un elemento agresor importante es la propia especulación, cuando todo se lleva al valor económico y se deja al margen el valor cultural. Una pérdida importante de gran parte del tejido de nuestras ciudades históricas lleva la etiqueta de la especulación urbanística. Hemos vivido etapas pasadas en las que era más rentable, económicamente hablando, demoler que

No se protegen de la misma forma una romería o una fiesta que una actividad o un cuadro, una escultura, un edificio o una ciudad

conservar. Incluso se premiaba con más altura y más edificabilidad las operaciones urbanas, en aras de una falsa modernidad.

Otras veces, el deterioro viene por la pérdida de funciones de la propia ciudad. Cuestiones derivadas de la concentración de usos, entendidos como monocultivos, que generan en muchos casos un encarecimiento del precio del suelo, propiciando barrios o sectores donde no se puede vivir.

En muchos casos, las cuestiones son más simples, y casi no nos damos cuenta de su importancia, aunque pueden cambiar el paisaje urbano de cualquier municipio. Una simple apertura de una puerta de cochera, para incorporar una plaza de aparcamiento en el interior de una vivienda o, si pensamos en las instalaciones de placas solares, cableados eléctricos o las derivadas de las telecomunicaciones. Son todos elementos, en muchos casos necesarios, que incorporamos sin más o por ignorancia y que, dependiendo del valor del edificio, podremos cuestionarnos o no su idoneidad.

Finalmente, habría que señalar como importante agente agresor el propio expolio de bienes culturales. No se nos escapan importantes yacimientos arqueológicos, por ejemplo, que han sido esquilados de la

noche a la mañana, con fines puramente delictivos. Es por ello por lo que, dependiendo de la agresión y de su causa, la instrumentación de la protección que se llevará a cabo variará en gran medida.

La protección desde la legislación y herramientas de las Administraciones competentes en cultura y patrimonio histórico

La *Constitución Española* (1978), en su artículo 46, señala que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.

Siguiendo este mandato constitucional, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, en su preámbulo, indica que “el Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos”. Y continúa en su artículo primero: “Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español”.

En esta misma línea, se pronuncia la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía y la posterior de 2007, siguiendo el mandato del *Estatuto de Autonomía para Andalucía* de 1981 cuando, en su artículo 12.3, se refiere a “la protección y realce

del Patrimonio Histórico como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma”.

Vemos, por tanto, que, desde los distintos escalones de la Administración del Estado, de las propias Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, la protección del patrimonio es uno de los pilares fundamentales en la gestión del patrimonio histórico. Para ello, la legislación va dotando a las distintas Administraciones y escalas de instrumentos que se van cualificando o especializando según el caso a tratar.

En líneas generales, en este sentido podemos decir que encontramos instrumentos de protección que, en primer lugar, sirven para identificar el bien. Aunque parezca algo obvio, tener una herramienta legal que dé cobertura a los bienes, simplemente conociendo, atestiguando su existencia, es muy importante. Pensemos que lo que no se conoce no se puede proteger. Son muchos los ejemplos que podríamos poner de bienes que se han destruido por la falta de constancia de su existencia. De ahí la necesidad de elaborar registros, censos, inventarios, catálogos, etc., que muestren a la sociedad la variedad y cualidad de nuestro patrimonio. Por lo general, en las grandes ciudades, y muy relacionados con la existencia de universidades, proliferan estos recursos, en parte porque existen más medios, pero también por un mayor acceso al conocimiento. Sin embargo, otras realidades más alejadas de los centros de poder es más fácil que carezcan de recursos que garanticen y profundicen en el conocimiento de sus bienes. De ahí la necesidad de hacer estudios que visibilicen la existencia de dichos bienes.

Ahondando en esta identificación, es muy importante el reconocimiento tipológico de la variedad

de bienes expresada en las distintas leyes patrimoniales. No es lo mismo ser un monumento, un jardín histórico, un sitio histórico, un conjunto histórico o una zona arqueológica que un lugar de interés etnológico o industrial, por solamente referirnos a los bienes inmuebles. Poder diferenciar casuísticas dependiendo de sus características funcionales, constructivas, etc., supone un avance en sí mismo.

En un segundo escalón, podemos encontrar instrumentos de protección que profundizan en la protección del bien. Acabamos de indicar que el conocimiento es básico, pero si ello no va acompañado de medidas efectivas que desarrollen dicha protección, nos faltarían herramientas. En los últimos años, la legislación del patrimonio ha avanzado conceptualmente mucho, y con ello, las técnicas hacia una protección más activa e incluso preventiva.

En este sentido, la figura del entorno de monumentos, introducida con la legislación de 1985, que actúa casi como un embalaje que protege un determinado bien, es de mucha utilidad. El contexto donde se encuentra un bien no solo lo protege de posibles agresiones, sino que también ayuda a conservarlo y meterlo en escala. Garantiza en muchos casos la secuencia urbana, evitando que el bien aparezca como pequeñas islas en el mar de la desprotección.

La misma línea de profundización se consigue con las instrucciones particulares que concretan, para cada bien y su entorno, la forma en que deben materializarse las obligaciones derivadas de su protección. Asimismo, la gran posibilidad de asociar al bien protegido elementos que forman parte de la historia material del mismo es todo

un avance. Pensemos en una iglesia que pudiera desvincularse de sus retablos, o en el caso de un elemento industrial, por ejemplo, una hacienda, la importancia de tener la posibilidad de conservar sus maquinarias, herramientas, que explican su uso y el propio sentido de los espacios.

Como vemos, a medida que profundizamos en la idea de protección el panorama se nos amplía y entendemos la importancia de contar con buenas herramientas. Una de las últimas que se han incorporado al sistema instrumental legislativo son las medidas que luchan contra la contaminación visual o perceptiva. Efectivamente, cada vez nos damos más cuenta de que el paisaje urbano está más lleno de cableado, contadores, antenas, paneles solares, publicidad, señalética, papeleras, contenedores, etc., en general, elementos disonantes que nos impiden apreciar, en el mejor de los casos, determinados bienes patrimoniales. La falta de previsión o estudios, pero también la mala gestión en muchos casos de recursos necesarios hace que cada cual vaya llenando la vía pública de piezas sin ningún sentido. Tener la posibilidad de arbitrar un plan de descontaminación es una medida interesante.

Hemos ido recorriendo las posibilidades de la instrumentación, pero sin ninguna duda el elemento más poderoso que nos facilita la legislación patrimonial es el planeamiento urbanístico. Pero no siempre ha sido así. Efectivamente, es a partir de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 cuando se traslada a la legislación urbanística esa facultad, que se ha ido perfeccionando en la legislación autonómica más reciente (Ley 14/2007). El planeamiento de protección puede identificar individualmente los elementos y espacios a cata-

logar y proteger, estableciendo distintas jerarquías y niveles de actuación según su importancia patrimonial. Puede proteger los usos y actividades, controlar las actuaciones edificatorias, tipos de obras, desde la nueva planta a las obras menores. Cuidar el paisaje urbano, la movilidad, la estética de los edificios, el control de materiales, alturas, en definitiva, propicia el modelo de ciudad que deseamos.

Podríamos terminar aquí con la lista de instrumentos generados para la protección del patrimonio, pero debemos señalar que también desde otros frentes podemos encontrar medidas de fomento —que animan a la preservación del patrimonio— en algunos casos y, en otros, jurídicas, que penalizan las malas prácticas, y que ayudan incluso por su efecto disuasorio. Nos estamos refiriendo en el apartado positivo a las bonificaciones fiscales, deducciones en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), en el catastro, etc., que favorecen las inversiones en el patrimonio, tanto a nivel individual, como en lo relativo a empresas, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Incluso la propia Administración para sí misma establece el denominado 1,5% Cultural, que le obliga

La protección del patrimonio requiere buenas y variadas herramientas. Sin ninguna duda, el instrumento más poderoso es el planeamiento urbanístico

a invertir en patrimonio histórico ese porcentaje de cualquier obra pública (por ejemplo, obras en una carretera o una planta de residuos) que se haga sobre un territorio.

En el lado opuesto, entraría el régimen sancionador. Desgraciadamente, en muchos casos se necesita saber que nuestras actuaciones pueden tener consecuencias, incluso penales, para no generar un daño sobre el patrimonio. Existe el deber de conservación y si no lo ejercemos, la propia Administración, por su deber de tutela, puede asumir dicha obligación y hacerla por nosotros, si llegara el caso. También las obras precisan de licencia urbanística y cualquier actuación sobre un edificio protegido, sin permiso, puede acarrear problemas graves e incluso penas de cárcel. En definitiva, si el patrimonio es un bien social, nosotros, como ciudadanos individuales, responsables y sabios, pero también la sociedad en general como grupo organizado, debemos articular medidas que garanticen su protección, su acrecentamiento y su transmisión a las generaciones futuras.

La protección desde otros ámbitos sectoriales

Hemos señalado que desde la legislación cultural existe una vinculación directa, casi podríamos decir una especie de transferencia de la protección del patrimonio a la Administración urbanística, que es la que, en definitiva, delega a los Ayuntamientos la elaboración del planeamiento urbanístico sobre su término municipal.

No obstante, el territorio es una realidad compleja y antropizada donde se superponen muchas más realidades que interactúan de forma simultánea y

que son administradas desde otros ámbitos competenciales. Algunos de esos componentes son naturales, intrínsecos del medio natural, y otros han sido realizados por el ser humano. Nos referimos, por ejemplo, a las carreteras, ferrocarriles, pero también a la línea de costa, puertos, ríos, montañas, bosques, dehesas, olivares, viñedos, ecosistemas complejos, en definitiva, otros actores que, llegado su momento, también interactúan con el patrimonio.

Hemos hablado, hasta ahora, del patrimonio histórico, pero también tenemos patrimonio natural, agrícola, forestal, ganadero, pesquero, vinculado a las infraestructuras, puentes, vías pecuarias, estaciones de ferrocarril y un largo etcétera. Elementos, paisajes que son custodiados, protegidos por otras Administraciones competentes.

En ocasiones, las divisiones de competencias están claras, pero en otras, sobre un mismo elemento puede recaer una doble protección, de la Administración cultural y la del sector concreto al que se haga referencia.

Por ejemplo, la línea de costa es una competencia del Estado español, al igual que las aguas, los ríos principales, manantiales, en general toda la cuestión hídrica y defensiva. Pero es muy frecuente encontrar en este ámbito yacimientos arqueológicos, ejemplos de arquitectura defensiva como torres vigías o búnkeres, elementos que forman parte explícitamente del patrimonio histórico desde el siglo pasado. Las zonas militares en activo, los campos de tiro o de entrenamiento tampoco son sus competencias municipales y ello conlleva en muchos casos la imposibilidad de edificar. Pero son bastantes los espacios naturales que han sido

preservados de la especulación urbanística del litoral debido a estos fines.

La protección medioambiental es en los últimos años una buena aliada para la conservación y preservación. Desde la Administración del ramo se elaboran instrumentos de planificación medioambiental de bastante calado, como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), los Planes de Desarrollo Integral (PDI) y los Programas de Fomento (PF). Mientras que los PORN y PRUG poseen carácter normativo y gestor, los PDI y los PF tienen un carácter marcadamente económico. Sus determinaciones relativas al patrimonio histórico tienen carácter vinculante.

Quizás por la simultaneidad o coincidencia de bienes protegidos sobre un mismo territorio, la figura administrativa de monumento natural es la que más elementos recoge. La Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en su artículo 12, considera a los monumentos naturales con la categoría de espacios naturales protegidos y los define en su artículo 16 como “espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial, así como las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, ecoculturales o paisajísticos”, elaborando para su control un Registro de bienes naturales.

En este Registro podemos encontrar, y por solo citar un ejemplo, el monumento natural de carácter

mixto, denominado la Peña de Arcos de la Frontera, formación geológica de gran envergadura originada por el río Guadalete, pero que soporta en su superficie el conjunto histórico de la ciudad de Arcos.

Para finalizar, es preciso citar algunos ejemplos de colaboración, incluso entre tres Administraciones. Son varios los casos donde antiguos trazados de ferrocarril (competencia del Estado), incluyendo sus estaciones (patrimonio arquitectónico, insertos en catálogos municipales o incluso bienes de interés cultural), han sido transformados en vías verdes, con el acuerdo de la Administración medioambiental.

¿Cómo y dónde consultar el grado de protección de un bien?

Los bienes situados físicamente en un municipio, cuando se protegen de manera oficial, se registran por la Administración cultural competente, al igual que ocurre, por ejemplo, con los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad. Dependiendo del alcance de la protección —local o municipal, autonómica, nacional o incluso internacional—, nos podemos encontrar que un mismo bien protegido esté registrado en varios sitios a la vez.

Todos los Ayuntamientos podrán informar, en primera instancia, de la relación de bienes protegidos que existen en su término municipal. Por lo general, serán las concejalías de cultura, educación y urbanismo las que dispongan de dicha información. Sin embargo, es posible encontrarse que la documentación esté incompleta o que existan errores derivados de la falta de actualización, por

Aunque pueda suponer molestia a la propiedad, los BIC tienen la obligación de abrir al público gratuitamente una vez al mes

ejemplo, de sus catálogos urbanísticos. Para una información más certera es conveniente acudir a la Administración cultural autonómica, pues es la responsable última de la protección.

En los últimos años se ha llevado a cabo un proceso amplio de transparencia con la voluntad de acercar a la sociedad civil el conocimiento del patrimonio, fomentándose el acceso al mismo a través de las nuevas tecnologías, mediante la difusión en abierto de numerosas bases de datos que contemplan nuestro patrimonio. En última instancia se puede hacer una consulta por escrito a la Administración cultural para obtener el listado exacto de los bienes protegidos en cualquier ámbito.

Hay que señalar que la consulta del planeamiento vigente es un derecho y que todos los municipios deben tener un ejemplar para su consulta (en papel o informatizada) libre y gratuita, a disposición de cualquier ciudadano. No obstante, no debemos olvidar que el planeamiento es un documento técnico, que consta de una parte escrita y otra gráfica, por lo que es posible que, para su lectura e interpretación correcta, se precise de la ayuda de un profesional de la arquitectura, preferiblemente de un arquitecto urbanista con formación en patrimonio.

Si la consulta tiene como fin último saber, sin ninguna duda, el tipo de obra que podemos hacer sin incumplir la legalidad vigente, lo mejor es pedir la cédula urbanística de la parcela o del inmueble en cuestión. Es un documento legal y vinculante que expide cada Ayuntamiento y en él se expresa exactamente si está o no protegido, tipo o características de las obras, usos permitidos, en definitiva, todas las condiciones a cumplir. Es un documento que, dependiendo del Ayuntamiento, tiene un coste o no, pero, en general, si se factura, su importe es bastante irrisorio.

¿Qué consecuencias tiene la protección de un bien?

Ser un bien protegido es uno de los máximos reconocimientos que un inmueble puede tener, por lo tanto, como sociedad, ya sea si está en nuestro municipio como fuera de él, nos deberíamos sentir felices de poder disfrutar y pertenecer a un territorio lleno de cultura.

En la legislación se suele hablar de equidistribución de cargas y beneficios, lo que significa que debe haber un reparto entre las bondades de las cosas y las limitaciones derivadas de su disfrute. En materia patrimonial, dependiendo del grado de protección, podemos disfrutar de exenciones fiscales, ya sea a la hora de pedir licencia de obras como en el IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) o en el recibo de la contribución. También suelen producirse exenciones en el cumplimiento de cuestiones relativas a la accesibilidad, salubridad o de naturaleza energética que se exigen a los edificios de nueva planta, pero que se simplifican o eliminan en los casos de rehabilitación.

En el apartado de cargas, los bienes de interés cultural tienen la obligación con determinadas condiciones de garantizar la apertura al público de forma gratuita una vez al mes. Evidentemente, ello puede suponer una molestia a su dueño o poseedor, pero el resto de la sociedad lo entendemos como un gran beneficio. Existe también un control sobre las obras, para garantizar que las mismas no deterioren los valores que las hicieron merecedoras de la protección. También, *a priori*, se marcan limitaciones a la hora de agregar o segregar el edificio y en caso de compraventa hay que comunicar a la Administración este hecho con carácter previo. La Ley de Patrimonio faculta a la Administración a lo que se conoce como derecho de tanteo y retracto sobre bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz [↙](#) y en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz; ello implica que dicha compraventa habrá de ser previamente notificada por sus titulares a la Consejería de Cultura y a los municipios en que radiquen dichos bienes, con dos meses de antelación, indicando el precio y condiciones en que se pretendan enajenar. El derecho de tanteo y retracto las transmisiones onerosas de la propiedad o cualquier otro derecho real de uso o disfrute de bienes muebles o inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. En la práctica, son muy pocos los casos en los que la Administración ejecuta dicho derecho. Con ello se persiguen dos cosas, la primera, que en caso de transmisión sea la propia Administración la que se quede con el bien, y la segunda, que fiscalmente se establezca el verdadero precio y no se incurra en la mala praxis de escriturar una cantidad por debajo de su precio real.

¿Cómo proponer la protección patrimonial de un bien?

Tradicionalmente, es la propia Administración cultural la que sistemáticamente ha ido elaborando a partir de registros conocidos de bienes la propuesta de declaración, lo que se denomina actuaciones de oficio. En otros casos se actuaba de emergencia, pues la iniciativa de protección se debía al conocimiento de obras o actuaciones que ponían en peligro la integridad del propio bien. De esta forma, los bienes se iban incluyendo en los catálogos urbanísticos y así se establecía un marco claro de cuál es la realidad patrimonial.

En las últimas décadas, y aunque se siguen produciendo las dos situaciones anteriores, son muchas las declaraciones que parten desde la sociedad civil, por lo general, por la iniciativa de asociaciones concienciadas con la defensa del patrimonio, así como por ciudadanos individuales orgullosos de su cultura. Las iniciativas se proponen directamente ante la Delegación Provincial de Cultura, encargada de iniciar el expediente de protección y de su tramitación administrativa. Indudablemente, cuanto mayor sea el consenso y más apoyo se tenga, mucho mejor. De esta forma, se llega más significativamente a los bienes, pues la cercanía a ellos propicia su conocimiento, valoración y, por ende, su protección.

Gusta pensar que es esta la mejor de las situaciones. Entendemos que es el resultado de formar parte de una sociedad responsable, que vive en una democracia madura que entiende que hay una responsabilidad individual ante el patrimonio, como bien cultural común que nos identifica, representa y simboliza. Es una forma plena de sentir que el patrimonio es nuestro.